



Universidad
Carlos III de Madrid

 **-Archivo**

Repositorio Institucional

ESTUDIOS SOBRE EL FUTURO CÓDIGO MERCANTIL

Libro homenaje al profesor

Rafael Illescas Ortiz



Díaz de Lezcano Sevillano, Nicolás. La representación cambiaria. Examen de la jurisprudencia reciente y de la regulación prevista en el anteproyecto de ley de código mercantil. En: *Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor Rafael Illescas Ortiz*. Getafe : Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 1993-2013. ISBN 978-84-89315-79-2. <http://hdl.handle.net/10016/20998>

Obra completa disponible en: <http://hdl.handle.net/10016/20763>



Este documento se puede utilizar bajo los términos de la licencia Creative Commons [Atribución-NoComercial-SinDerivadas 3.0 España](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/)

LA REPRESENTACIÓN CAMBIARIA. EXAMEN DE LA JURISPRUDENCIA RECIENTE Y DE LA REGULACIÓN PREVISTA EN EL ANTEPROYECTO DE LEY DE CÓDIGO MERCANTIL

NICOLÁS DÍAZ DE LEZCANO SEVILLANO *

Resumen

En este trabajo en homenaje al prof. Rafael Illescas se pretende analizar la situación actual del controvertido tema de la representación cambiaria, que ha dado lugar a diferentes posturas tanto de la doctrina como de la jurisprudencia, especialmente en las sentencias dictadas por las audiencias Provinciales. Lo haremos a la luz de las recientes sentencias dictadas por nuestro Tribunal Supremo para la unificación de doctrina, a partir de la sentencia de 5 de abril de 2010 y como el rigor de ésta se ha ido matizando en resoluciones posteriores. Igualmente, se estudian las novedades previstas en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil en materia de representación cambiaria, como son la ausencia de mención a la presunción de autorización de los administradores de compañías y por otro, el reconocimiento expreso que se hace de la ratificación en materia de representación cambiaria.

Contenido

1. Introducción. – 2. Requisitos de la representación cambiaria. – 2.1. Poder. – 2.2. Forma. – 2.2. Reflejo cartular de la representación. La *contemplatio domini*. – 2.3. Debate doctrinal y jurisprudencial. – 2.3.1. Aceptación. – 2.3.2. Pagaré. – 3. Régimen de responsabilidad del art. 10 LCCH. – 4. Examen de la ausencia de presunción de autorización de los administradores de compañías. – 5. La ratificación.

1. INTRODUCCIÓN

Nos encontramos ante una figura jurídica, como es la representación cambiaria, cuyo régimen legal, así como sus requisitos han sido muy debatidos tanto por la doctrina como por la jurisprudencia dado el gran número de reclamaciones judiciales planteadas al respecto como consecuencia de la innumerable casuística y de la postura variable seguida por nuestros tribunales al respecto. Como trataremos de exponer en este breve trabajo, cuya finalidad es examinar estos temas a luz de la más reciente jurisprudencia y de la normativa prevista en el Anteproyecto de Ley de Código Mercantil.

* Profesor Titular de Derecho Mercantil de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

La representación cambiaria es un tema de gran actualidad no solo por los debates doctrinales y jurisprudenciales suscitados al respecto, sino por su importancia económica, ya que, cada vez más, las condiciones técnicas y socio-económicas, así como la celeridad del tráfico mercantil requieren la realización de las declaraciones cambiarias a nombre de otro. Todas estas circunstancias unidas a que la regulación contenida en Ley Cambiaria y del Cheque es excesivamente parca¹, ha dado lugar a un gran número de sentencias de nuestras Audiencias Provinciales con criterios jurídicos diferentes a la hora de interpretar las exigencias legales de la representación cambiaria². Esta diversidad de pareceres jurídicos seguidos por la denominada jurisprudencia menor produjo que el Tribunal Supremo entrará a conocer de esta problemática por vía del recurso de casación para la unificación de doctrina, pero la paradoja, como intentaremos exponer en este trabajo, es que una vez fijada una doctrina uniforme por nuestro Alto Tribunal tuvo que inmediatamente matizarla para fijar una especie de “reunificación” doctrinal acorde a las exigencias de la realidad jurídica requeridas por el tráfico económico.

2. REQUISITOS DE LA REPRESENTACIÓN CAMBIARIA

A la hora de examinar el régimen de la representación cambiaria recogida en la normativa vigente, en concreto en los artículos 9 y 10 de la LCCH, debemos precisar, aunque sea brevemente, algunos aspectos relevantes de los elementos que han de concurrir para la eficacia y validez de la declaración cambiaria emitida por representante.

2.1. Poder

Los postulados básicos del derecho común al regular la representación precisan la concurrencia de poder para a válida y eficaz actuación en nombre de otro. En este sentido, las declaraciones cambiarias no suponen un régimen especial que conlleve la derogación de la normativa general contenida al respecto en el Código Civil. Por tanto, las declaraciones cambiarias no tienen un carácter personalísimo como la gran mayoría de las declaraciones de voluntad, en consecuencia, conforme a los principios generales

¹ Vid. ALONSO ESPINOSA, J., *Representación cambiaria: presupuestos y eficacia*, Tecnos, Madrid, 1995 págs 9 y ss quien critica esta regulación en especial art. 9 al que considera que no es una verdadera norma jurídica sino un mero recordatorio/advertencia a los firmantes y, en todo caso, incompleta y sectorial. En sentido similar, bajo el régimen del Cco, LANGLE, E., *Manual de Derecho Mercantil Español*, T. II, Barcelona, 1954, pág. 200 calificaba de exiguas reglas.

² Los diferentes criterios jurisprudenciales, sobre todo, en las sentencias de las Audiencias Provinciales colleva una gran inseguridad jurídica, cfr. por todos, IRACULIS ARREGUI, N., "La representación cambiaria: omisión de la *contemplatio domini*", *RDBB*, 120, 2010, pág. 252; LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero y mercado de valores. Cuestiones controvertidas en torno a la expresión documental de la *contemplatio domini* en el ámbito de la representación cambiaria", en AA. VV. *Estudios de derecho mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*; Cuñat Edo, V. (dir.), Massaguer Fuentes, J. (dir.), Alonso Espinosa, F. J. (dir.), Gallego Sánchez, E. (dir.), M. V. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, pág. 1445.

del derecho de obligaciones, pueden ser emitidas válidamente tanto por sí, como por medio de representante, toda vez que las disposiciones cambiarias en esta materia no suponen un derecho especial que modifica o deroga el régimen general de la representación, ni menos aún prohíba la representación en su ámbito (arts. 8 a 10 LCCH y 96 LCCH)³.

Por tanto, la declaración cambiaria, como toda declaración de voluntad, emitida en nombre ajeno exige que la persona que interviene tenga poder de representación de aquel por quien lo hace⁴. Ahora bien, esta representación cambiaria podrá revestir singularidades, según quien sea el sujeto jurídico representado. En caso de que el representado sea una persona física debemos considerar que la emisión de declaraciones cambiarias suponen, dadas las consecuencias que conllevan, un acto de estricto dominio con arreglo al 1712 Cc, requiriendo apoderamiento de manera expresa y especial en aplicación del art. 1713 Cc⁵. Si es una compañía mercantil, como el texto legal reconoce expresamente, este requisito queda mitigado ya que se trataría de un mero acto de administración que recae en dentro de la esfera competencial de sus gestores por el hecho de ser administradores de una sociedad mercantil⁶. No obstante, a pesar de la literalidad del art. 9 LCCH, consideramos que la diferencia expuesta en cuanto a la forma de representación tiene su razón de ser en la diferencia de persona física o jurídica, pero, en este último caso, no resulta tan precisa la diferenciación según sea empresario social u otra modalidad de persona jurídica. No parece que sea el carácter mercantil del representado el que le atribuya ciertas singularidades a la forma de la representación, sino la consideración de que la persona física que actúa por la persona jurídica dentro de sus competencias y lo hace como órgano de la misma, a través de la denominada representación orgánica⁷. Esta mención, como veremos se omite en el Anteproyecto que no establece distinción entre sujetos a la hora de la representación cambiaria por lo que habrá que estar, en el caso de las personas jurídicas a regulación legal y estatutaria que determinen la competencia y facultades de su órgano de

³ Vid. GARRIGUES, J., *Tratado de Derecho Mercantil*, T. II, Madrid, 1955, pág. 276; ALONSO ESPINOSA, F.J., *Representación...*, op. cit., págs. 12 y 13; CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., "Las declaraciones cambiarias", en VV. AA., *Derecho cambiario*, E. M. (dir.), Senés Motilla, M. C. (dir.), Campuzano Laguillo, A. B., (coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 65 y 66; VELASCO SAN PEDRO, L.A. *La representación cambiaria*, Lex Nova, Valladolid, 1990, págs. 11 y ss.; EIZAGUIRRE, J. M. de, *Derecho de los Títulos-Valores*, Thomson-Civitas, Madrid, 2003, pág. 135.

⁴ En este sentido, la STS 20 de mayo de 2009 consideraba que *el apoderamiento conforma un acto jurídico por medio del cual el principal concede voluntariamente al apoderado poder y facultades de representación para llevar a cabo las funciones y actividades que constituyen el objeto del encargo, proyectándose en lo externo en cuanto relaciona al representado con los terceros, siempre que el apoderado-representante actúe dentro de los límites del poder. (...) el mandato debe ser conferido por actos de carácter unívoco y concluyente; que debe acreditarse cuando se trata de ejercitar las facultades del mandato frente a terceras personas; y que no es suficiente el otorgamiento de una escritura notarial para acreditar las facultades y representación que dice ostentar el mandatario si no se cumple el requisito de aportar los documentos de los cuales surge la representación*",

⁵ Vid. STS de 6 de junio de 1959.

⁶ Ya que para el comerciante la firma de un título valor es un acto de mera administración, vid. ALONSO ESPINOSA, J., *Representación...*, op. cit., pág. 13; CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., "Las declaraciones...", op. cit. pág. 66.

⁷ En sentido contrario, la STS 9 de diciembre de 2005; en la doctrina CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., "Las declaraciones...", op. cit. págs. 66 y 67.

representación y la consideración de la emisión de obligaciones cambiarias como un acto propio de su actividad cualquiera que sea su naturaleza.

2.2. Forma

EL artículo 9 LCCH exige en que todos los que pusieren firmas a nombre de otro en letras de cambio deberán hallarse autorizados para ello con poder de las personas en cuya representación obraren, expresándolo claramente en la antefirma⁸, redacción que prácticamente sigue el Anteproyecto, cuyo artículo 610-7 recoge en el prf. 1 que el que firmare a nombre de otro un título-valor deberá tener poder suficiente de representación, y mencionarlo claramente en la antefirma. Prácticamente, salvo alguna corrección de estilo, la gran diferencia estriba en sustituir el término autorización por la expresión de mayor rigor jurídico, tener poder suficiente de representación, así como la generalización de esta figura a todos título-valores de manera expresa sin tener que acudir a interpretaciones analógicas. El art. 9 LCCH es un precepto literalmente referido a la letra de cambio, sin referencia ni precepto análogo en la regulación del cheque, ni del pagaré. Además, recoge en su párrafo segundo, la presunción de autorización, término que carece de verdadero rigor jurídico en el derecho privado, en referencia exclusiva a los "administradores" de Compañías, es decir a "los encargados a la gestión social" (art. 120 del Código de Comercio), según la clase de sociedad (colectiva, en comandita, anónima o de responsabilidad limitada) de que se trate⁹.

La literalidad del art. 9 conllevaría que en los casos en que el representado no sea un empresario social, no habría presunción de hallarse autorizado, por lo que debería otorgarse poder al efecto, siendo necesario y especial para firmar letras de cambio. Se trataría de la aplicación régimen del derecho común que requiere poder especial por conforme a lo previsto en el art. 1713 del Cc, toda vez que teniendo en cuenta la naturaleza de las obligaciones que se derivan de la firma de una cambial no puede considerarse que la firma de las obligaciones cambiarias sea como un acto de mera administración propio de su tráfico económico sino que debería entenderse como un acto de riguroso dominio que excede los límites de la simple administración y por ello requiere poder expreso y especial, como hemos visto. Pero esta presunción desaparece en el texto del Anteproyecto.

⁸ Este precepto es una transcripción casi literal del art. 447 del Cco de 1885 por cuya relevancia transcribimos: Todos los que pusieren firmas a nombre de otro en letras de cambio, como libradores, endosantes o aceptantes, deberán hallarse autorizados para ello con poder de las personas en cuya representación obraren, expresándolo así en la antefirma. Los tomadores y tenedores de letras tendrán derecho a exigir a los firmantes la exhibición del poder. Los administradores de Compañías se entenderán autorizados por el solo hecho de su nombramiento.

Este precepto omite la declaración cambiaria de aval.

⁹ La reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de octubre de 2014 ha reconocido la responsabilidad de la sociedad aunque formalmente D. J. no era administrador de L. C. SA, pues no cabe duda de que actuaba como factor notorio de dicha sociedad: siempre había sido su representante en anteriores relaciones comerciales con la actora y siguió comportándose como tal, sin advertir que ya había cesado su representación legal, pero firmando igualmente los pagarés por una deuda que era de la sociedad y que se emitían contra una cuenta bancaria titularidad de la misma sociedad, siendo la responsabilidad de ésta la forma adecuada -y admitida por la jurisprudencia- de proteger la apariencia, la buena fe y la seguridad del tráfico .

2.2. Reflejo cartular de la representación. La *contemplatio domini*

Ahora bien, a pesar de que, como hemos señalado, existe unanimidad doctrinal y jurisprudencial en cuanto a la exigencia de poder, o disposición legal en caso de representantes legales, para efectuar declaraciones cambiarias en nombre de otro, son numerosísimas las veces en que se omite el reflejo cartular de este requisito, dando lugar a una enorme casuística y, en consecuencia, a un amplio volumen de controversias judiciales¹⁰. La actuación por representación, a tenor de lo dispuesto en el art. 9 de la LCCH, no solo precisa la existencia de poder, expreso, o presunto por ser inherente a la actividad organica del representante, sino que en cualquier caso no es suficiente tener poder conferido para actuar en nombre de otro, se precisa que la cambial refleje la representación, esto es la *contemplatio domini*.

La LCCH requiere que se exteriorice la *contemplatio domini* mediante su reflejo en el texto de la letra, pero no precisa el modo en que debe llevarse a cabo el reflejo cartular, solo menciona que su constancia deba ser de manera clara en la antefirma¹¹.

La *contemplatio domini* requiere desde la perspectiva formal, con arreglo al art. 9 LCCH, que tanto la constancia cartular del carácter representativo, como la identidad del dominus y la firma del representante¹², lo que tiene trascendencia para el representante y para el tercero, al primero le concede atribuye eficacia representativa a sus actos y al tercero le permite la individualización subjetiva del negocio a celebrar, haciendo reconocible el sujeto destinatario de los efectos que puedan derivarse del negocio realizada por el representante.

2.3. Debate doctrinal y jurisprudencial

El art. 10 LCCH, modificando el régimen del derecho común recogido en el art. 1259 Cc dispone que si el representante no tiene poder, la firma de una letra de cambio como

¹⁰ Así, entre otros, VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...*, op. cit., págs. 195 y ss.; MAIRATA, J., "Contemplatio domini y relación causal en la letra de cambio", *RDBB*, núm. 65, 1997, págs. 183 y ss.; DE EIZAGUIRRE, J. M., *Derecho...*, op. cit. pág. 136, IRACULIS, N., "La representación...", op. cit. pág. 254.

¹¹ En este sentido, el *alieno nomine agere* debe expresarse en el propio título cambiario, por exigencia del principio de literalidad, si bien no necesariamente, en determinados casos y en relación con alguno e incluso con los dos extremos que la integran (esto es, indicación de que la suscripción se realiza en nombre de otro y consignación de la identidad de dicho *dominus negotii*), junto a la firma del representante, cfr. LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", op. cit. pág. 1448.

En la jurisprudencia, la STS de 9 de junio de 2010 de la que fue ponente Ferrándiz Gabriel, cuyos hechos fueron que la entidad financiera en la posición de tenedora legítima de dos pagarés de los llamados de cuenta corriente, interpuso demanda de juicio cambiario contra quien aparecía como firmante, por constar en ellos, en el lugar destinado al librador, su nombre y apellidos seguidos de una rúbrica, Doña M. negó que la firma que aparecía en cada uno de los títulos, junto a su nombre y apellidos, fuera auténtica, en ella se consideró que "*este mandato se funda en el principio de formalidad de la letra de cambio y atiende a la seguridad del tráfico mercantil, el cual exige que quienes participan en el giro conozcan con precisión la identidad de quienes intervienen en una letra de cambio y el concepto en que lo hacen*".

¹² En este sentido, ALONSO ESPINOSA, F. J., *Representación...* op. cit., pág. 12 señala que la exigencia de reflejo del poder del art. 9 procede de la transcripción del antiguo art. 435 del Código de 1829 que requería poder especial, pero el art. 447 ya no exigió poder especial sino general, pero no modificó la redacción de su texto.

representante de una persona sin poder para ello (falso representante), o excediéndose de sus poderes (abuso de facultades) implicará que el firmante quede obligado personalmente en virtud de la letra, y si la pagare, tendrá los mismos derechos que hubiera tenido el supuesto representado¹³. Pero, a pesar de esta dicción, el mayor problema jurídico radica en concretar las consecuencias que conlleva el incumplimiento del reflejo cartular de la *contemplatio domini*.

El problema más controvertido y que ha generado amplios debates doctrinales y jurisprudenciales, es que, a pesar del rigor con que está redactado el art. 9 LCCH, es si la ausencia de alguno de estos presupuestos puede afectar a la validez de la declaración cambiaria, en términos más precisos, si se trata de requisitos *ad solemnitatem*, o meramente *ad probationem*¹⁴.

En la primera concepción, si la expresión de la *contemplatio domini* es un requisito *ad solemnitatem*, su omisión conllevaría un defecto que afectaría a la validez de la declaración del representante, este sector doctrinal más formalista sostiene que a tenor de lo dispuesto en el art. 10, en la letra de cambio, no es suficiente tener la atribuida la facultad de actuar o decidir por cuenta de otro de manera extracambiaria, la representación tiene que hacerse constatar en el propio texto de la letra de cambio como elemento de validez inherente al cumplimiento de los principios básicos de nuestra normativa cambiaria como son: los principios de literalidad y abstracción¹⁵. En este línea, el cumplimiento del art. 9 LCCH, supone expresar cartularmente la representación y de manera clara en la antefirma, dejando plena libertad en cuanto a la materialización de esta constancia cartular que podrá ser con expresiones como pp, po, pr, u otras análogas.

La segunda postura, supone una concepción de la *contemplatio domini* como un elemento formal de la letra de cambio pero a efectos meramente probatorios, y por ello, su omisión no afectaría a la validez de la declaración efectuada por el representante, permitiendo que la representación, cuyo reflejo cartular se ha obviado, pueda

¹³ El régimen del art. 10 LCCH es más favorable para el acreedor cambiario que el previsto en el 1259. 2Cc que era la norma aplicable antes de la aprobación de la LCCH al carecer elCco de normativa específica, pues el falso representante no tenía responsabilidad cambiaria y el tercero debería acudir al régimen de responsabilidad aquiliana del 1902Cc para reclamar por los daños y perjuicios causados, cfr. en el mismo sentido, GARRIGUES, J., *Tratado...*, op. cit. pág. 278; VAZQUEZ BONOME, A., *Tratado...*, op. cit. pag. 158; MOXICA ROMAN, J., *Ley Cambiaria y del Cheque. Análisis de doctrina y jurisprudencia*, Pamplona, 1990, pág. 112; EIZAGUIRRE, J. M. de, *Derecho ...*, op. cit. págs. 135 y ss.; IRACULIS ARREGUI, N., "La representación...", op. cit. pág. 254.

Por su parte, GARCIA LUENGO, R. y SOTO VAZQUEZ, R., *El nuevo régimen jurídico de la Letra de Cambio en la doctrina y en la jurisprudencia*, Comares, Granada, 1986, pág. 25 y 32 defienden que art. 10 añade una precisión en cuanto al exceso de poder que no estaba prevista en el art. 8 de la Ley Uniforme de Ginebra pero tampoco abarca todos los supuestos pues deja fuera la representación necesaria de menores e incapaces y no puede quedar comprendido en dicho artículo dada su referencia a la representación voluntaria.

¹⁴ No obstante cualquiera que fuere la solución, la omisión de la *contemplatio domini* no es un vicio invalidante de la letra, no obstante VAZQUEZ BONOME, A., *Tratado de Derecho Cambiario*, 3ª ed., Dykinson, Madrid, 1997, pag. 160 matiza que siempre que cosnte la firma del que emite la letra, librador.

¹⁵ Por todos, GARRIGUES, J., *Tratado...*, op. cit. pág. 277 quien considera que si existiendo poder este no se refleja en la letra lo que no está en la letra no esta en el mundo por lo que el representante queda obligado personalmente.

acreditarse por cualquier medio admitido en derecho aunque no esté recogido expresamente en la letra¹⁶.

Esta dualidad de criterios también ha tenido reflejo en nuestra jurisprudencia, pues si bien, tradicionalmente se ha manifestado partidaria de atribuir a la *contemplatio domini* el carácter *ad solemnitatem* de la referencia cartular de la representación, como veremos, recientemente se muestra favorable el carácter flexible de esta interpretación cartular¹⁷.

La jurisprudencia sostiene que si hay reflejo cartular del representante y del representado, pero no se recoge en el título el nexo representativo entre ambos, esto es, consta en la letra la persona del representante y la del representado pero no la relación de representación que los une. En este supuesto de concurrencia de firma del representante y la mera referencia al representado mediante su estampilla o sello comercial, pero sin mencionar se actúa por representación. La doctrina jurisprudencial, en relación a las declaraciones de libramiento y endoso de la letra, así como en el caso de emisión del pagaré, ha considerado que la *contemplatio domini* queda perfectamente acreditada y la omisión cartular carece de relevancia a efectos jurídicos, toda vez que la vinculación representativa se constata por la simple mención del sello estampillado perteneciente a la compañía representada¹⁸, con ello se visualiza plenamente frente a terceros la *contemplatio domini*, sin que aporte ninguna trascendencia jurídica la consignación cartular de expresiones como "por poder", "p.p." o similares¹⁹. Desde la perspectiva jurisprudencial, parece claro que la estampación del sello hace prueba suficiente de la identidad del representado, pero esta doctrina no puede aplicarse por extensión en aquellos casos en que del conjunto de las menciones cambiarias no pueda obtenerse un principio de prueba de la identidad del representado²⁰.

¹⁶ La doctrina tradicionalmente se ha inclinado por el carácter *ad probationem*, como una mención documental que sólo opera a efectos, de manera que su efectiva existencia podrá demostrarse a través de cualquier otro medio admitido en Derecho, así por todos: PAZ-ARES, C., "Las excepciones cambiarias..." cit., pág. 295; VICENT CHULIÁ, F., *Introducción al Derecho Mercantil*, II, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pág. 1.583; IRACULIS, N., *op. cit.*, pág. 257; CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., "Las declaraciones...", *op. cit.* págs. 78 y 79; LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", *op. cit.* pág. 1449; MARTINEZ-MOYA FERNANDEZ, M.: "La omisión de la contemplatio domini en la emisión de pagaré por administrador de sociedad de capital", en AA. VV. *Estudios de derecho mercantil. Liber amicorum profesor Dr. Francisco Vicent Chuliá*, V. (dir.), J. (dir.), F. J. (dir.), E. (dir.), M. V. (coord.), Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 1449 y ss. De una manera mucho más matizada, ALONSO ESPINOSA, F. J., *Representación...* *op. cit.*, págs. 28 y 29.

¹⁷ En este sentido, vid. ALONSO ESPINOSA, F. J., *Representación...* *op. cit.*, págs. 33 y ss.

Por su parte, LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", *op. cit.* pág. 1449 afirma que el Tribunal Supremo no ha llegado a formular un planteamiento general sobre la materia, pues se ha limitado a la fijación de una doctrina jurisprudencial de corte eminentemente casuístico.

¹⁸ La STS de 6 de septiembre de 2013 admitió la existencia de la contemplatio domini incluso en los casos en que la lectura de la estampilla sea difícil. Por su parte, la STS de 24 de marzo de 2014 de la que fue ponente Salas Carceller y cuyos hechos son la mercantil Y. O. SL presentó demanda contra E. A. SL por razón de un pagaré, la demandada se opone alegando la ausencia de representación en el título aunque los firmantes sean sus administradores, precisó el valor de la "estampilla" como identificativa de la sociedad que resultaba obligada, pero ello no implica la imposibilidad de que tal obligación se produzca incluso en casos en que no figure tal expresión en el título.

¹⁹ En tal sentido, lo ha declarado expresamente, la STS de 19 de mayo de 2009.

²⁰ Vid. CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., "Las declaraciones...", *op. cit.* págs. 66 y 67 la existencia de poder o representación de quien pone su firma en el título puede ser conocida de acuerdo con las restantes indicaciones o menciones contenidas en él, la representación será perfectamente válida. Así, la antefirma

Criterio análogo ha sostenido la doctrina, en relación con los supuestos en que se da esta omisión en la aceptación pues en aval y libramiento es poco frecuente en la práctica²¹, ha admitido la *contemplatio domini* si el representante tiene poder del representado aunque no se haya reflejado en la cambial, pero lo puede acreditar extracambiariamente, en especial en los casos en que figura como librado el representado y el firmante tiene poder del librado²².

2.3.1. Aceptación

Así, en relación con la declaración de aceptación de la letra de cambio en caso de omisión de toda idea de representación y de la mención del representado, se pueden resaltar varias posturas, una primera, la de quienes defienden que estas omisiones acarrear por exigencias de la seguridad jurídica, la buena fe y el principio de literalidad de los títulos valores que el firmante ha de asumir las obligaciones que se deriven de su firma como verdadero aceptante²³.

Por otro lado, quienes argumentan que la mera firma no puede valer para vincular al simple firmante como aceptante so pena de la excepción cambiaria prevista en el art. 67.2.2 LCCH. El representante, en este caso, podría responder, no como aceptante, pero sí como avalista, salvo que su firma esté precedida por la expresión acepto o si figura en el espacio reservado a la aceptación, en esta hipótesis que considerar la responsabilidad del firmante como aceptante por intervención al amparo de 71 LCCH²⁴.

se ha entendido implícita cuando en el mismo título aparece que la firma se hace en nombre de una persona jurídica: "cuando el librado de una letra de cambio es una persona jurídica, la firma que figure en el lugar destinado al acepto debe presumirse que es la de su representante legal, pues la antefirma que exige el párrafo primero del artículo 9.º de la Ley Cambiaria va implícita cuando en la misma letra aparece que la firma se hace en nombre del librado que es una persona jurídica" (SSTS 5 de abril de 2010; 25 de febrero de 1991).

²¹ Así, PAZ-ARES, C., "Las excepciones cambiarias", *Derecho cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque*, dir. Menéndez, Madrid, 1986, págs. 251 y ss., señala que la omisión de la representación en el libramiento y en el aval son supuestos raros en la práctica. Por su parte, GARRIGUES, Tratado, op. Cit. II, pág. 277 considera que el el libramiento y en el aval que da obligado el representante pues nada se deduce de la Letra de cambio. Aunue de producirse debería aplicarse lo dispuesto en el art. 9 LCCH al no haber distinción.

²² Así, PAZ-ARES, C., "Las excepciones cambiarias", *Derecho cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque*, dir. Menéndez, Madrid, 1986, págs. 295 y 296; IRACULIS ARREGUI, N., "La representación...", op. cit. pág. 257.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza de 8 de marzo de 1993 admitió la existencia de *contemplatio domini* en el acepto de una letra hecha por el hijo del librado pues la firma se produjo dentro del ámbito representativo tácito que el mencionado hijo tenía atribuido, pues afirmó que desde la sentencia del T.S. de 12 de octubre de 1908 es doctrina pacífica la de que según el verdadero sentido y alcance del antiguo art. 447 del Código de Comercio (reproducido, sin variación trascendente, en el artículo 9, párrafo primero, de la actual Ley Cambiaria, de 16 de julio de 1985), no es indispensable que sea personalmente el librado quien acepte la letra de cambio, pudiendo realizarlo válidamente cualquiera que tenga mandato o autorización de aquél.

²³ Esta fue la postura seguida por la STS de 28 de octubre de 1988 y compartida por numerosas sentencias de las Audiencias Provinciales.

²⁴ Así, MENÉNDEZ, A., "La aceptación", en MENÉNDEZ (Dir.), *Derecho Cambiario. Estudios sobre la Ley Cambiaria y del Cheque*, Civitas, Madrid, 1986, pág. 534; VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...* op. cit., págs. 67 y ss.; y ROJO, A., "El aval", en MENÉNDEZ (Dir.), *Derecho Cambiario. Estudios sobre la Ley Cambiaria y del Cheque*, Civitas, Madrid, 1986, págs. 570 y ss.

Otra postura, con arreglo a la cual no cabría imponer responsabilidad cambiaria al firmante, ya que hay aceptación por el librado en su condición de *dominus*, pues existe la *contemplatio domini* de manera tácita siempre que se pueda demostrar la representación por el tenedor que dirige su acción contra el librado como aceptante pues el representante que firmó como aceptante lo hizo con poder suficiente del librado *dominus* aunque no lo reflejó en la cambial²⁵: Lo que impide que los tenedores pudieran dirigir su acción directa como aceptante contra el representante, sin que pueda considerarse que se trataría de aval o aceptación por intervención, pues como aval no podría ser porque firma en el espacio reservado para la aceptación y no es un supuesto del art. 36.II, tampoco aceptación por intervención ya que el art. 76.II LCCH dispone que a aceptación por intervención se hará constar e la LC por lo que debería constar expresamente en el título por ir acompañada de las formulas por “por intervención”, “por honor” “a favor de...” o cualquier otra equivalente²⁶.

La jurisprudencia ha sido vacilante a este respecto²⁷. La variedad de criterios judiciales hizo necesaria la unificación de la doctrina jurisprudencial que estableció que la omisión por parte de quien firma el acepto de una letra de cambio (lo que también es aplicable al pagaré en virtud del art. 97 LCCH), de antefirma o de otra referencia al hecho de actuar por poder o por representación o como administrador de la entidad o sociedad que figura como librada en la letra no libera a éstas de responsabilidad como aceptante, excepto cuando el firmante del acepto carece de dicho poder o representación; y, a su vez, quien acepta la letra en tales condiciones no se obliga personalmente, sino que obliga a la entidad o sociedad que aparece como librado si

En relación a la consideración de avalista al firmante en representación del avalado, parece un supuesto más teórico que práctico, cfr. LA CASA GARCIA, R., “Mercado financiero...”, op. cit. pág. 1456, ya que la consideración de la firma del representante del librado como aval, en lugar de aceptación, sólo sería susceptible de plantearse, en abstracto, en relación con una hipótesis verdaderamente inusual en la práctica, esencialmente definida por la mera firma de dicho representante, sin indicación adicional alguna (ni de la voluntad de aceptar, ni del carácter representativo de la actuación llevada a cabo), puesta en cualquier lugar del anverso de la letra, siempre que no pudiera reputarse referida a la aceptación en razón de su ubicación.

²⁵ Entre otros, PAZ-ARES, C., “Las excepciones...” cit., págs. 295 y ss, y ALONSO ESPINOSA, F. J., *Representación...*, op. cit., pág. 32.

²⁶ En este sentido, PAZ-ARES, C., “Las excepciones...”, op. cit., pág. 296; ROJO, A., “El aval”, op. cit. pág. 571; VELASCO SAN PEDRO, L., *La representación...*, op. cit., pág. 70; LA CASA GARCIA, R., “Mercado financiero...”, op. cit. pág. 1456. Por su parte, MENÉNDEZ, A., “La aceptación...”, op. cit. pág. 534 señaló que la aceptación por intervención sólo se admite en situaciones de crisis cambiaria por haberse abierto la vía de regreso antes del vencimiento, y debe hacerse constar así con la finalidad de determinar cuál es la responsabilidad del aceptante interviniente.

²⁷ Vid. bajo un criterio formalista imponían la responsabilidad personal del firmante las SSAP de Cáceres 30 de enero de 1990, Castellón de 6 de febrero de 1992, Salamanca de 24 de febrero de 1998. En cambio, para otras Audiencias Provinciales, la omisión de la antefirma en la que se exprese que se actúa por poder constituye una irregularidad que no impide la responsabilidad del librado-- aceptante que actúa por representación, así, SSAP Madrid, de 7 de abril de 1992, de Segovia, 20 de febrero de 1995, Zaragoza de 8 de marzo de 1993, Audiencia Provincial de Madrid de 20 de febrero de 2001, Toledo de 29 de febrero de 2012. En este sentido es clara la

La SAP de Palma de Mallorca de 23 junio de 2006 precisó que la variada fenomenología que deriva sólo puede recibir una solución congruente con la exigencias del tráfico y razonable desde el punto de vista sistemático, si se parte de la premisa de que la consignación en la letra de la *contemplatio domini*, que demanda el art. 9 I LC, no constituye un requisito de forma que afecta a la validez de la actuación representativa en materia cambiaria, sino una mención documental que sólo opera a efectos de prueba.

efectivamente ostenta poder o representación de ella²⁸, ya que lo relevante a efectos jurídicos es que exista identidad material de sujetos no la identidad formal²⁹. Pero, esta doctrina tuvo que ser matizada en cuanto a su extensión, precisando que no tiene cabida cuando sea imposible deducir de las menciones de la letra o pagaré que se actúa como representante o apoderado de una sociedad o entidad, ya que debería presumirse que la mención de la representación era sencilla y no se hizo y no puede derivarse del resto de menciones, ya que de lo contrario se podría ver afectada la seguridad jurídica³⁰. *En consecuencia*, el firmante de una letra de cambio quedará obligado en nombre propio cuando no haga mención expresa en el título al poder o representación con que actúa o no conste junto a su firma la estampilla de la razón social de la persona jurídica en cuyo

²⁸ Esta unificación de doctrina fue fijada en la importante STS de 5 de abril de 2010, de la que fue ponente Xiol Ríos, y cuyos hechos corresponden a la aceptación de una cambial hecho por el administrador de una sociedad sin expresar que lo hace por poder. Esta sentencia inicia el criterio de unificación de doctrina estableciendo con claridad que la omisión por parte de quien firma el acepto de una letra de cambio de antefirma o de otra referencia al hecho de actuar por poder o por representación o como administrador de la entidad o sociedad que figura como librada en la letra no libera a éstas de responsabilidad como aceptante, excepto cuando el firmante del acepto carece de dicho poder o representación; y, a su vez, quien acepta la letra en tales condiciones no se obliga personalmente, sino que obliga a la entidad o sociedad que aparece como librado si efectivamente ostenta poder o representación de ella y *se funda en los siguientes argumentos*: a) *Del artículo 33 en relación 25 y 29 LCCH, se desprende que el único de los intervinientes en la letra de cambio que puede aceptarla es el librado. Únicamente puede darse una excepción en el caso de aceptación por intervención, la cual solo se admite en situaciones de crisis cambiaria por haberse abierto la vía de regreso antes del vencimiento y debe hacerse constar así con la finalidad de determinar cuál es la responsabilidad del aceptante interviniente (artículo 71 LCCH). Por consiguiente, la existencia de una firma en la casilla de acepto sin más indicaciones pone de manifiesto que quien la stampa actúa en su condición de apoderado o representante de la entidad o sociedad que figura como librado en la letra de cambio, cuya mención es esencial según el artículo 1.3.º LCCH.* b) *El que firma como representante de otra persona solo queda obligado en su nombre si carece de poder y los tomadores y tenedores de letras tendrán derecho a exigir a los firmantes la exhibición del poder (10 LCCH). Se presumirá que los administradores de compañías están autorizados por el solo hecho de su nombramiento (artículo 9 II LCCH). De esta regulación se desprende que para la LCCH resulta sustancial la existencia o no de poder, susceptible de comprobación, para determinar si el firmante se obliga personalmente u obliga a la entidad o sociedad librada. La expresión en la antefirma de que se actúa por poder constituye un requisito formal encaminado a poner de manifiesto este carácter frente a los tomadores y tenedores de la letra. Sin embargo, no puede interpretarse rigurosamente en aquellos casos en los cuales la actuación como apoderado o representante por quien pone su firma en el acepto ocupando el lugar que corresponde a la sociedad librada resulta evidente para los tomadores de la letra y estos no pueden, por ende, desconocer una representación que deriva de las menciones de la letra y de la necesidad de las personas jurídicas de actuar por medio de representantes.* c) *Esta interpretación no afecta a la seguridad del tráfico cambiario, por cuanto la designación de la sociedad librada en la casilla correspondiente despeja toda duda acerca de que quien firma la casilla de acepto no puede ser sino quien actúa en su representación, cuya existencia puede ser comprobada por el librador exigiendo la presentación del poder, y, en consonancia con ello, solo responderá personalmente en el caso de inexistencia de poder o representación.* d) *Por el contrario, la conclusión opuesta obligaría a entender que la ausencia de antefirma por parte del aceptante no solo obligaría personalmente a éste, sino que comportaría el efecto adyacente de liberar a la sociedad librada de los efectos de la aceptación, a pesar de haberse podido comprobar la existencia de poder o representación en favor de quien firma en el acepto.* e) *En el caso de que la letra sea presentada al cobro por el librador, esta conclusión resulta reforzada por el principio de acuerdo con el cual el obligado puede oponer al tenedor de la letra que participó en el negocio causal las excepciones personales que tenga contra él (artículo 20 LCCH)".*

²⁹ Así, las SSAP de Madrid de 20 de febrero de 2001, y Palma de Mallorca de 23 junio de 2006 han afirmado que esa identidad no es una identidad formal (o identidad entre la designación del librado y la firma del aceptante), sino una identidad material (o identidad en el orden jurídico entre el sujeto librado y el sujeto que queda comprometido por la aceptación).

³⁰ La STS de 9 de junio de 2010 consideró que estimar lo contrario comportaría un menoscabo de la seguridad del tráfico cambiario.

nombre interviene³¹, por ser imposible interpretar del resto de declaraciones cambiarias recogidas en el título que lo hace como representante o apoderado de una sociedad, aunque extracambiariamente ostente dicha cualidad³².

2.3.2. Pagaré

En relación con el pagaré, la jurisprudencia ha declarado que la doctrina de que el firmante de un pagaré queda obligado en nombre propio si no hace constar el poder o representación con que actúa o, al menos, la mención de la estampilla de la razón social en cuya representación actúa, dado que resulta imposible deducir de las menciones del pagaré que actúa como representante o apoderado de una sociedad o entidad aunque ostente esta condición respecto de una o varias³³. La obligación del representante firmante del pagaré es de naturaleza cambiaria concretamente la misma que la del emisor del pagaré en base al art. 97. 1 de la LCCH, y esto es porque "*resulta imposible deducir de las menciones del pagaré que actúa como representante o apoderado de una sociedad o entidad aunque ostente esta condición respecto de una o varias*". Pero, además, la tácita representación como puede ser el señalar la entidad bancaria y el número de cuenta contra la que se emite el pagaré, no constituye un elemento que permita deducir, ni siquiera indiciar, la actuación representativa del firmante, "*porque el momento a tener en cuenta es el del libramiento, no el del impago, y entonces no tenía por qué saber el acreedor que la cuenta no era la del firmante como librador*" y la ausencia de librado elemento esencial de la letra de cambio³⁴.

La más reciente jurisprudencia sostiene la necesidad de que concurran de tres requisitos: que la reclamación se mantenga en el ámbito de la relación causal, que conste en el proceso, sin distinción de medio de prueba, el carácter de deudora de la sociedad y la condición de representante de quien estampó su firma en el título. De concurrir

³¹ Compartimos con LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", op. cit. pág. 1453 su crítica en el sentido de que no puede entenderse que la estampilla sea el único modo admisible de dar cumplimiento a la exigencia legal de constancia documental de la *contemplatio domini*. Por el contrario, debe considerarse que el Tribunal Supremo ha querido referirse nuevamente al supuesto paradigmático, esto es, al modo más frecuentemente utilizado en la práctica (*id quod plerumque accidit*), sin cerrar el paso a la validez de cualquier otra fórmula por cuyo medio pueda indicarse la identidad del *dominus*, particularmente a través de su consignación manuscrita.

³² Así lo recoge la STS 12 de diciembre de 2011.

Esta doctrina es aplicable igualmente al pagaré dado que el artículo 96 LCCH establece que serán aplicables al pagaré, mientras no sean incompatibles con la naturaleza de este título, entre otras, las disposiciones relativas a la letra de cambio en materia de las consecuencias de la firma puesta en las condiciones mencionadas en los artículos 8 y 9 LCCH; de firma de una persona que actúe sin poderes o rebasando sus poderes; de vencimiento; de pago; y de acciones por falta de pago. Estas materias comprenden, entre otros, los artículos 8, 9, 10, 20 y 67 LCCH. El artículo 97 LCCH establece que el firmante de un pagaré quede obligado de igual manera que el aceptante de una letra de cambio. Del conjunto de estos preceptos se infiere que las disposiciones en relación con los efectos de la firma sin hacer constar el poder o representación, a que se refiere el artículo 10 LCCH, son aplicables al firmante de un pagaré, como expresamente señalan las SSTs de 9 de junio de 2010, 7 de mayo de 2012 y 9 de abril de 2012.

³³ STS de 9 de junio de 2010, seguida por las SSTs de 12 de diciembre de 2011; de 9 de abril de 2012; y de 7 de mayo de 2012.

³⁴ STS de 12 de diciembre de 2011; seguida por las SSTs de 9 de abril de 2012; y de 7 de mayo de 2012.

estos requisitos debemos atribuir a la sociedad la condición de deudora y obligada al pago de la cantidad por la que el título se emitió³⁵.

3. RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD DEL ART. 10 LCCH

En suma, el riguroso régimen de responsabilidad previsto en el art. 10 LCCH al imponer al firmante de una letra de cambio, como representante de una persona sin poderes para obrar en nombre de ella, de quedar obligado personalmente en virtud de la letra, no puede extenderse al supuesto de quien teniendo poderes para actuar en nombre de otro no lo hace constar en la letra de cambio o pagaré, pues el art. 10 LCCH impone un régimen sancionador especial diferente al fijado en el derecho común y recogido en el art. 1259.2 Cc cuya aplicación extensiva no debería producirse³⁶. Sería materialmente injusto sancionar con un régimen tan riguroso a quien es verdadero representante aunque no lo haya hecho constar en el texto de la LC³⁷. Al firmante que no exprese cartularmente su representación, no le quedan frente al tenedor otras excepciones personales que las basadas en su relación personal con el tomador³⁸. En fin, frente a la regla general sentada en el artículo 1259, párr. 2º, Cc, el art. 10 LCCH consagra una responsabilidad cuasinegocial basada en la apariencia en aras de la debida salvaguarda de la seguridad del tráfico mercantil³⁹. En la medida de lo posible la justicia material exige la concordancia de lo reflejado en la letra de cambio con la realidad extracambiaria como salvaguarda de la seguridad del tráfico mercantil.

³⁵ Así, SSTs de 12 diciembre de 2013, 31 marzo de 2014, 2 abril de 2014, 22 de octubre de 2014 y 4 de diciembre de 2014.

³⁶ LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", op. cit. pág. 1462 muchas dudas suscita la aplicación extensiva que, por vía analógica, se termina realizando de una norma de naturaleza especial (como es la establecida en el art. 10 LCCH, que se aparta de lo previsto con alcance general en el art. 1.259, párr. 2º, Cc).

³⁷ Por todos, PAZ-ARES, C., "Naturaleza jurídica de la letra de cambio", en MENÉNDEZ (Dir.), *Derecho Cambiario. Estudios sobre la Ley Cambiaria y del Cheque*, Civitas, Madrid, 1986, págs. 172 y ss.; LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", op. cit. pág. 1461.

³⁸ A tal efecto, la jurisprudencia más reciente SSTs, de 17 de abril de 2006, 9 de junio de 2010; y de 19 de julio de 2012, manifiestan que debe tenerse presente que la relación causal o subyacente entre el firmante y el tomador del pagaré, así como en las posteriores transmisiones del título, ha de ser propiamente calificada como relación de valor o valuta (y no como relación de provisión de fondos, que es la que media entre el librador y el librado de la letra de cambio), según ha tenido oportunidad de poner de manifiesto reiteradamente el si bien debe reseñarse que la errónea calificación como relación de provisión de fondos, en la que han incurrido en ocasiones algunos firmantes, no impide por sí sola el examen de la procedencia de las excepciones basadas en las relaciones causales eventualmente alegadas frente a la acción directa ejercida por el tenedor.

Pues bien, en las mencionadas resoluciones se señala también que la inexistencia de causa que justifique la emisión (o la ulterior transmisión) del pagaré ha de ser probada por quien la alegue como excepción (véase igualmente, SSTs de 2 julio de 2012, en consonancia con un anterior pronunciamiento del Tribunal Supremo, según el cual la falta de provisión de fondos debe demostrarse por quien invoca su inexistencia, STS de 20 de noviembre de 2003, al que suele asignarse un valor paradigmático en lo concerniente a la carga de la prueba en el ámbito de las excepciones extracambiarias.

Finalmente, ha de recordarse la ilimitada oponibilidad de excepciones basadas en las relaciones personales en el juicio cambiario, según la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo (SSTs 23 de diciembre de 2010; 18 de enero de 2011; 4 de junio de 2012; y de 5 de diciembre de 2012).

³⁹ VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...* op. cit., págs. 111-115, y PAZ-ARES, C., "Las excepciones..." op. cit., págs. 290-291.

Ahora bien, la jurisprudencia favorable a la extensión del reconocimiento de la *contemplatio domini* más allá del estricto reflejo cartular, no es general, se limita en función de la naturaleza del representado, se restringe al caso en que los representados sean estrictamente sociedades mercantil⁴⁰. Esta interpretación, como vimos, es excesivamente restrictiva en cuanto al resto de personas jurídicas, sostenemos que la consideración de la *contemplatio domini* no debe quedar acotada a las sociedades mercantiles sino en general a las personas jurídicas que actúan por medio de sus representantes legítimos⁴¹.

Diversa es la situación cuando son personas físicas quienes se encuentran a ambos lados de la relación de representación. En este caso, parece exigirse que concurren los dos requisitos: mención de la actuación representativa y la denominación del representado. Sin esta concurrencia, no habría *contemplatio domini* y quedaría obligado cambiariamente el representante y no el representado dada la ausencia de dicho requisito y las consecuencias del principio de literalidad de los títulos valores que impone la responsabilidad a quien firma sin mención de la representación⁴². Ahora bien, la interpretación amplia de la *contemplatio domini* que hemos expuesto y que admite la jurisprudencia en relación a las personas jurídicas debe extenderse al caso de ser dos personas físicas las que intervienen en la declaración cambiaria objeto de la

⁴⁰ Tal se así que la STS de 19 de mayo de 2009 sostuvo que el criterio flexible sentado en relación con la constancia cartular de la *contemplatio domini* viene *exclusivamente* referido al ámbito societario. Sería suficiente que el representante o administrador de una sociedad o entidad estampe en la antefirma el sello de la misma con datos suficientes para identificarla, "*cuando un librador o endosante de una cambial (o de un pagaré) es una sociedad resulta suficiente, y cumple el trámite normal, la firma del representante de ella, juntamente con la mención de la estampilla de la razón social en cuya representación actúa aquél*" (SSTS 5 de abril de 2010; 19 de mayo de 2009). En la misma línea se había pronunciado la jurisprudencia, bajo el régimen del derogado art. 447 del Código de Comercio señalado que "*...sin que sea necesario que los administradores de las compañías hagan mención del poder, ya que va unido a su cargo, de ahí que baste expresar en la antefirma el nombre de la entidad ("contemplatio nomine") para hacer visible la relación representativa frente a todos los posibles poseedores de la letra. (SS. 24 de abril de 1970; 12 de diciembre de 1985 "a contrario sensu"; 22 de junio de 1991; y 11 de septiembre de 2003), doctrina que puede mantenerse con la actual LCCH; toda vez los arts. 9 y 10, y por remisión en sede de pagaré el art. 96, no contiene ninguna novedad trascendente al respecto.*

⁴¹ En igual sentido, MOXICA ROMAN, J., *Ley Cambiaria...*, op. cit. págs. 157 y 158, LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", op. cit. págs. 1452 y ss. En cambio, CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., "Las declaraciones...", op. cit. págs. 66 y 67 parece limitarlo a los empresarios. Por su parte, VALPUESTA GASTAMINZA, E. M.; LLORENTE, C. y SÁNCHEZ LERMA, G. A., *Práctica cambiaria*, Bosch, Barcelona, 2000, págs. 48 y 49 admiten la legitimación pasiva por firma de representante con constancia de antefirma, a la Comunidad de bienes y comunidad de propietarios págs. 65 y 66.

En esta línea, podemos resaltar la STS de 22 de junio de 1991 que admitió la aceptación de una letra de cambio, librada contra un Ayuntamiento, por su propio alcalde, que se limitó a estampar junto a su firma el sello de la propia alcaldía, estimando que fue el Ayuntamiento en cuestión quien quedó obligado cambiariamente como aceptante.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Oviedo de 11 de junio de 1988, admitió la responsabilidad de una comunidad de vecinos en un cambial firmada por su presidente si actúa dentro de sus atribuciones.

⁴² No obstante algún sector doctrinal entiende que la suscripción del firmante sería nula, sin perjuicio de la responsabilidad extracambiaria que hubiere podido contraer por los daños y perjuicios a terceros por tal circunstancia ex art. 1902Cc con la posibilidad que el tenedor que se hubiera relacionado directamente con el representante podrá dirigir acción cambiaria contra el dominus demostrando el carácter representativo de la suscripción realizada, así LA CASA GARCIA, R., "Mercado financiero...", op. cit. pág. 1453; VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación cambiaria...* op. cit., págs. 71 y ss.

representación⁴³. Aunque, en caso de que la reclamación se efectue por un tercero de buena fe al firmante, éste no le podrá oponer la relación de representación porque ha creado una apariencia jurídica de ser titular de la declaración, por la omisión de la constancia de su representación, que ha hecho que el tercero considere que se relaciona con el firmante quien lo hizo en su propio nombre dada la literalidad del título.

En resumen, la doctrina sostiene una línea preferentemente formalista de la *contemplatio domini* frente a terceros, y más flexible entre las partes inmediatas del contrato de entrega, reduciendo inter partes la representación a una relación extracambiaria, o sea tendrían un carácter causal inter partes y abstracto respecto a terceros de buena fe⁴⁴.

4. EXAMEN DE LA AUSENCIA DE PRESUNCIÓN DE AUTORIZACIÓN DE LOS ADMINISTRADORES DE COMPAÑÍAS

El artículo 9.II de la LCCH dispone que se presumirá que los administradores de Compañías están autorizados por el solo hecho de su nombramiento. En base a esta presunción, cuando el representado sea un empresario social, el representante no precisa la atribución de facultad expresa para obligar cambiariamente. Esta consideración tiene su razón de ser en el hecho de que las declaraciones cambiarias forman parte de los actos ordinarios de comercio y por ello se trataría de un acto de mera administración para el representante quien por su propio nombramiento tiene asignadas las facultades representativas para los actos ordinarios del comercio siempre que formen parte del giro o tráfico de la empresa,⁴⁵ pues el administrador, por el hecho de serlo no pierde su

⁴³ Cfr. ALONSO ESPINOSA, F. J., *Representación...* op. cit., págs. 31 y 32.

⁴⁴ Cfr. EIZAGUIRRE, J.M., *Derecho...*, op. cit. págs. 136 y 140; VELASCO SAN PEDRO, L., *La representación...*, op. cit. págs. 56 y ss.; ALONSO ESPINOSA, A., *Representación...*, op. cit. págs. 27 y ss.; PAZ-ARES, C., "Las excepciones...", op. cit. pág. 298; IRACULIS ARREGUI, N., "La representación...", op. cit. pág. 259 y 260; MUÑOZ MARTÍN, N., "Representación cambiaria y falta de contemplatio domini. Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 13 de abril de 1991", *RDBB*, 53, 1994, pág. 204.

La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 13 de septiembre de 1996 señaló que el principio de literalidad, la Ley obliga a que la *contemplatio domini* conste en el propio texto de la letra de cambio. Sabido es, no obstante, que cuando los derechos cambiarios se ejercitan entre quienes fueron parte de las relaciones subyacentes a las letras, la literalidad debe ceder a favor de la configuración de derechos y obligaciones que resulte de esas relaciones subyacentes.

⁴⁵ Cfr. PAZ-ARES, C., "Las excepciones...", op. cit. pág. 292 quien señala que el aval suele tratarse de operaciones extrañas al objeto social y por ello no habría responsabilidad de la compañía. Por su parte, en relación con el aval, ROJO, A., "El aval", *Derecho cambiario. Estudios sobre la ley cambiaria y del cheque*, dir. Menéndez, Madrid, 1986, págs. 559 más allá del objeto social se requiere que los estatutos confieran esa facultad de avalar fuera del objeto social o un acuerdo en tal sentido de la Junta general, pero está no podrá otorgar tal facultad si los estatutos lo prohíben y por tanto son eficaces frente a terceros las limitaciones de las facultades de los administradores si están fuera del objeto social y han sido inscritas en el Registro Mercantil.

En este sentido, la reciente STS de 7 de octubre de 2014 declaró que *se presumirá que los administradores de compañías están autorizados por el sólo hecho de su nombramiento*". Esta presunción alcanza a las declaraciones cambiarias emitidas, en nombre de la sociedad, por los administradores titulares del poder de representación (orgánica). En este caso, la titularidad del poder de representación venía atribuida al consejo, que debía ejercerlo colegiadamente. Propiamente, el firmante, aunque era presidente del consejo de administración, no tenía atribuido ni legal, ni

actividad particular, sigue conservando su esfera propia de actuación de la que no puede ser privado, además habría la posibilidad de que pudiera actuar por varias empresas⁴⁶.

Ahora bien, esta presunción es una excepción al régimen general del derecho común que precisa el otorgamiento de un poder expreso y especial por lo que debe ser interpretada de modo restrictivo a los "administradores" de Compañías, es decir a "los encargados a la gestión social" (art. 120 del Código de Comercio), según la clase de sociedad (colectiva, en comandita, anónima o de responsabilidad limitada) de que se trate⁴⁷, pero no exime de la obligación de hacer constar la *contemplatio domini* con arreglo al art. 9. I LCCH⁴⁸.

Si el representado no es una compañía, la participación y consiguiente firma de las declaraciones cambiarias no puede considerarse como un mero acto de administración, por lo que será preciso poder especial para firmar letras de cambio. Un poder conferido en términos generales sería insuficiente y no permitiría la realización de declaraciones cambiarias a nombre de otro, dadas las consecuencias que conlleva la firma de una letra de cambio, por lo que sería un acto de riguroso dominio, que exige poder expreso por aplicación de la regulación general del derecho civil (art 1713 Cc)⁴⁹.

estatutariamente, ni por acuerdo de delegación de facultades del consejo, el poder de representación de la sociedad, razón por la cual no podía operar la previsión que se denuncia infringida del art. 1259Cc.

En el mismo sentido, la SAP de Toledo de 29 de febrero de 2012 sostuvo, con apoyo en el art. 129 LSA y 9 de la Primera Directiva, que el poder de representación que se confiere a los órganos sociales no es ilimitado, sino que el objeto social sigue siendo el ámbito inderogable externamente de las facultades de los administradores-representantes.

⁴⁶ Cfr. EIZAGUIRRE, J. M. de, *Derecho...*, op. cit. pág. 137; VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...*, op. cit. pág. 56 quien además añade la posibilidad de que el representante lo pueda ser de varias personas y sus actuaciones vayan dirigidas a afectar solo a alguna de ellas, IRACULIS ARREGUI, N., "La representación...", op. cit. pág. 254.

En el mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz de 20 de noviembre de 2001 destacó que "admitir que el administrador queda obligado sin necesidad de hacer constar en la autofirma la cualidad con la que interviene, sería tanto como reconocer el absurdo de que los mismos no pueden nunca obligarse en nombre propio o, lo que es aún peor, concederles una facultad de opción para responder como tal administrador o como particular, según le conviniera, lo que es evidente que resulta inadmisibles, amén de ir ello contra la seguridad del tráfico mercantil y contra la buena fe del tenedor del título que puede haber aceptado el efecto teniendo en cuenta la persona libradora del mismo, si bien también es cierto que la jurisprudencia ha paliado el formalismo atendiendo como suficiente, a los efectos aludidos, la firma del representante junto con la mención de la estampilla de la razón social de la entidad en cuya representación actúa aquél (véase, entre otras muchas, STS de 24 de abril de 1970)".

Hay que destruir la posibilidad de que el firmante aceptante administrador de una compañía ha podido querer vincularse personalmente en lugar de la sociedad de la que se administra sobre todo en casos de dificultades económicas de la sociedad, en este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 10 de julio de 2012 que consideró que la declaración cambiaria la emitió en nombre propio y para vincularse personalmente a la obligación que generó el título, y así se preceptúa en los artículos 8 y 9 de la L.C.CH. (aplicable a los pagarés a tenor de lo dispuesto en el art. 96 de la citada Ley), y ello va dirigido a proteger la buena fe del poseedor del título que puede haber aceptado el mismo teniendo en cuenta la situación patrimonial del firmante y no de la mercantil a quien se suministró las mercancías origen de los mismo, y dicho razonamiento se compadece con el hecho de que posteriormente T. S.L. fuera declarada en concurso. Igualmente debe precisar la sociedad por la que firma cuando ostenta la representación de varias, pues no podría derivarse del título por cual lo hace, vid. SAP de Palma de Mallorca de 23 junio de 2006.

⁴⁷ Vid. GARRIGUES, J., *Tratado...*, op. cit. pág. 277 considera que con la presunción del art. 447 hoy 9.II se eluden todos los problemas derivados de la interpretación de los estatutos sociales.

⁴⁸ Cfr. GARRIGUES, J., *Tratado...*, op. cit. pág. 277 en relación con la presunción del art 447 Cco, hoy 9.II LCCH.

⁴⁹ Así, CAMPUZANO LAGUILLO, A. B., "Las declaraciones...", op. cit. pág. 66.

La regulación del art. 9.II tiene su fundamento jurídico mercantil en el artículo 286 Cco, en virtud del cual lo hecho por el factor notorio dentro del giro o tráfico de la empresa se entenderá efectuado por cuenta del empresario aun cuando el factor no lo haya expresado al tiempo de celebrarlo⁵⁰, y la amplitud del poder de representación de los administradores de sociedades de capital que les atribuye el art. 234 LSC. Todo ello conlleva que la firma del administrador de una compañía puesta en la letra o pagaré para pago de una obligación de la sociedad, se debiera entender hecha por cuenta de la misma, salvo que se pruebe ser otra la voluntad del firmante que quiso asumir personalmente la deuda.

Lógicamente, las letras, pagarés o cheques firmados por administradores de sociedades de capital en nombre de éstas, se regirán por las normas societarias sobre el ámbito del poder de representación del órgano de administración, con el consiguiente efecto protector de los terceros con arreglo art. 234 LSC⁵¹.

En sentido similar, la DGRN señala que el alcance de las facultades representativas de los administradores de las sociedades mercantiles, en concreto el consejero-delegado, se fundamenta por el derecho positivo en los artículos 21, 281 y siguientes del Código de Comercio, artículo 9.2 de la Ley 19/1985, de 16 de julio, Cambiaria y del Cheque; 128 y 129 de la Ley de Sociedades Anónimas y 63 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; 9 y 124 del Reglamento del Registro

⁵⁰ Cfr. STS de 9 de febrero de 1984.

⁵¹ Cfr. DIAZ MORENO, A. y NUÑEZ LOZANO, P. L., “Las declaraciones cambiarias”, en VV. AA., *Derecho cambiario*, E. M. (dir.), Senés Motilla, M. C. (dir.), Campuzano Laguillo, A. B., (coord.), Tirant Lo Blanch, Valencia, 2013, págs. 85 y ss.

La STS de 16 de junio de 1998 estaca esta situación al considerar que es evidente que el aludido representante, D. J.I.M.F., tenía poderes bastantes para firmar el contrato de opción de compra, pero, en todo caso, siendo como era Administrador de la Sociedad obligada a la misma al cumplimiento de lo pactado en relación con quienes actuaban de buena fe (art. 129 LSA), por lo que debe concluirse que existió por parte de la sociedad y de sus socios, consentimiento suficiente para que les obligue el contrato de opción de compra firmado. Indubitado el carácter de Consejero-Delegado de A.S.A. de don E.L.M.A., quien en nombre de la sociedad avaló las letras de cambio representativas del pago del precio aplazado de la compraventa, sin que en ningún momento se haya alegado y, menos aún, probado la existencia de mala fe en el vendedor cuyo derecho al cobro del precio así se garantizaba, viene obligada la sociedad avalista a soportar las consecuencias de su declaración cambiaria, sin perjuicio de las acciones que puedan asistirle frente a su representante legal.

Mercantil y 1715 y siguientes del Código Civil⁵². Igualmente tiene su apoyo en el artículo 9 de la Primera Directiva Comunitaria en materia de sociedades⁵³.

El Anteproyecto en el art. 610-8 sobre firma sin poder o con poder insuficiente hace la más mínima referencia a esta presunción⁵⁴. Esta omisión tiene justificada su razón de ser ya que no aporta nada, siendo una mera reproducción de los preceptos generales aplicables en materia de representación mercantil. Se trata de un precepto que reproduce literalmente el art. 447 del Cco de 1885 y nos es más que un reflejo de normas del derecho común o generales del derecho de sociedades, 234 LSC, y cuya redacción que no aporta nada y carece de referente en la Ley Uniforme de Ginebra⁵⁵, por lo que aún en ausencia del mismo el principio de rigor formal de las declaraciones cambiarias la solución no diferiría en nada⁵⁶.

5. LA RATIFICACIÓN

La novedad más importante de la actual redacción del Anteproyecto en materia de representación en los títulos valores es haber introducido en el artículo 610-8. 2 la institución de la ratificación, reconociendo de manera literal que la ratificación por parte del representado de la firma efectuada por el representante sin poder o con poder

⁵² Cfr. Las resoluciones de la DGRN de 28 de noviembre de 2003 con referencia a las de 1 de julio de 1976, 2 de octubre de 1981, 31 de marzo de 1986, 12 de mayo de 1989 y la más reciente de 3 de octubre de 1994.

⁵³ El artículo 9 de la Primera Directiva del Consejo, de 9 de marzo de 1968, tendente a coordinar, para hacerlas equivalentes, las garantías exigidas en los estados miembros a las sociedades definidas en el segundo párrafo del artículo 58 del tratado, para proteger los intereses de socios y terceros (68/151/CEE) (DOCE, L 65, DEL 14) señala que la sociedad quedará obligada frente a terceros por los actos realizados por sus órganos, incluso si estos actos no corresponden al objeto social de esta sociedad, a menos que dichos actos excedan los poderes que la ley atribuya o permita atribuir a estos órganos. No obstante, los Estados miembros podrán prever que la sociedad no quedará obligada cuando estos actos excedan los límites del objeto social, si demuestra que el tercero sabía que el acto excedía este objeto o no podía ignorarlo, teniendo en cuenta las circunstancias, quedando excluido el que la sola publicación de los estatutos sea suficiente para constituir esta prueba. Las limitaciones a los poderes de los órganos de la sociedad, resultantes de los órganos competentes, no se podrán oponer frente a terceros, incluso si se hubieran publicado. Si la legislación nacional previera que el poder de representación de la sociedad puede atribuirse, no obstante la regla legal en la materia, por los estatutos a una o a varias personas que actúen conjuntamente, esta legislación podrá prever la oponibilidad de esta disposición de los estatutos frente a terceros, a condición de que se refiera al poder general de representación; la oponibilidad de tal disposición estatutaria frente a terceros estará regulada por las disposiciones del artículo 3.

⁵⁴ El art. 610.8 del Anteproyecto recoge que el que sin poder o con poder insuficiente firme en nombre de otro un título que documente una obligación de pago quedará obligado como si hubiera obrado en nombre propio y, si hiciera frente a esa obligación, tendrá los mismos derechos que tendría el supuesto representado. Si el poder fuera insuficiente, el representado quedará obligado dentro de los límites del poder.

2. La ratificación por parte del representado de la firma efectuada por el representante sin poder o con poder insuficiente retrotraerá los efectos a la fecha de la suscripción. La ratificación deberá ser expresa y realizarse en el propio título o en un suplemento.

⁵⁵ Así, GARCIA LUENGO, R. y SOTO VAZQUEZ, R., *El nuevo régimen...*, op. cit. pág. 25.

⁵⁶ Cfr. EIZAGUIRRE, J. M. de, *Derecho...*, op. cit., pág. 135 y 137, considera que se trata de un precepto superfluo; por su parte, ALONSO ESPINOSA, F. J., *Representación...*, op. cit., pág. 10 destaca que el art. 9.II se evidente y no aporta nada.

En cambio, GARRIGUES, J., *Tratado...*, op. cit. pág. 277 considera que con la presunción del art. 447 hoy 9.II se eluden todos los problemas derivados de la interpretación de los estatutos sociales.

insuficiente retrotraerá los efectos a la fecha de la suscripción y, desde el punto de vista formal, dispone que ha de ser expresa y realizarse en el propio título o en un suplemento.

La ratificación supone una declaración de voluntad, unilateral y recepticia del supuesto representado que puede ser expresa o tácita y se integra con las declaraciones previamente efectuadas por su representante sin poder, con poder insuficiente o no acreditado y el tercero con quien contrató, perfeccionando el negocio jurídico celebrado por éstos y asumiendo sus consecuencias⁵⁷.

Nuestro derecho, actualmente, no regula de forma expresa esta figura jurídica, ni en el Código Civil ni el Código de Comercio la figura de la ratificación⁵⁸, aunque la era admitida por la doctrina⁵⁹. La ratificación, desde la perspectiva del derecho común, puede realizarse a través de representante y ser expresa o tácita. Igualmente, la jurisprudencia señala que puede ser expresa o de hechos concluyentes para que pueda convalidar el negocio jurídico nulo efectuado por el apoderado ex art. 1259 del Código Civil⁶⁰. La ratificación tácita será cuando el mandante acepta en su provecho los efectos de lo ejecutado sin su autorización, poniendo de manifiesto con ello su consentimiento a lo que se realizó excediéndose⁶¹, o si el mandante se aprovecha de los actos celebrados por el mandatario extralimitándose de las facultades conferidas por el mandato; así como en aquellos otros en los que la ratificación se desprende de sus actos concluyentes o inequívocos⁶², por lo que el contrato no puede reputarse como inexistente y queda de esta forma dotado de validez.

El texto del Anteproyecto omite la ratificación tácita, e impone que debe ser realizada en el propio título. La ratificación expresa, desde la consideración del derecho común, deberá realizarse con sometimiento a los mismos requisitos de forma que requiera el negocio a ratificar. Pero, nuestra legislación de títulos valores no es excesivamente formalista y hay declaraciones cambiarias que no requieren de especiales formalidades. Por ello se ha sostenido que si lo pretendido es suplir a posterior la ausencia de poder bastará con cumplir las formalidades del poder no del negocio

⁵⁷ Sobre la institución de la ratificación en derecho común, vid. DÍEZ PICAZO, L., *La representación en el Derecho Privado*, Ed. Civitas reimpresión, Madrid, 1979, pp. 220 y ss.

⁵⁸ Como referencias a la ratificación, podemos mencionar en el Código Civil, el artículo 439 en relación con la posesión, el artículo 1259 en materia de contratos en general, el artículo 1727 para el mandato el artículo 1892 respecto a los cuasicontratos. En el Código de Comercio se hace referencia la ratificación en el art. 144 en relación a los daños a las compañías por un socio. El art. 343 respecto las cantidades entregadas en señal de un contrato de compraventa. Los arts. 561 y 562 sobre auto judicial en caso de robo, hurto o extravío de los títulos. La LCCH carece de referencia a la ratificación. Sí, en cambio, el actual Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, así el artículo 236, en relación con la ausencia de exoneración de responsabilidad de los administradores, el artículo 409 sobre suscripción de las obligaciones y el artículo 526 respecto al ejercicio del derecho de voto por administrador en caso de solicitud pública de representación.

⁵⁹ Cfr. Por todos, SANCHEZ CALERO, F.; “Las excepciones cambiarias”, *RDBB*, 1988, pág. 49; VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación ...*, op. cit., págs. 103; PAZ-ARES, C., *Las excepciones...*, op. cit. pág. 291.

⁶⁰ Cfr. STS 27 de diciembre de 1999, con referencias a las sentencias de 20 de junio de 1894, 7 de mayo de 1897, 26 de junio de 1905, 23 de enero de 1943, 4 de julio de 1944, 4 de enero de 1947, 13 de diciembre de 1965.

⁶¹ Vid. SSTS de 5 de abril 1950; 27 mayo 1958; 10 octubre 1963; 25 octubre 1975; 10 de mayo 1984; y 2 de octubre de 1995, entre otras.

⁶² SSTS de 14 de junio de 1974, 23 de octubre de 1990, 27 de diciembre de 1999, 13 de junio de 2002.

principal⁶³. Consideramos con arreglo a lo expuesto anteriormente para la representación, pues la ratificación es una representación *ex post*⁶⁴, que no tendría razón jurídica admitir la representación tácita con carácter general, al amparo de lo previsto en el actual art. 9 LCCH y que reproduce el texto del Anteproyecto y no dar validez a la ratificación hecha de manera tácita o por actos concluyentes.

Permitir la ratificación tácita supone mejorar la posición del acreedor cambiario, es la postura acorde con lo establecido para *contemplatio domini*, además se reconoce la ratificación tácita en el derecho común art. 1727 Cc, no parece que el Anteproyecto pretenda establecer en materia de representación cambiaria un régimen especial que derogue al régimen general del Cc, pues no tendría lógica suprimir la presunción del art. 9.II por ser superfluo y no añadir nada al derecho común al que se remite, y en cambio, no permitir la ratificación hecha de manera tácita⁶⁵. La jurisprudencia reciente reconoce validez a la ratificación tácita en el ámbito de la representación cambiaria. En este sentido, la STS de 7 de octubre de 2014 va más allá y considera el mero silencio como equivalente a la ratificación tácita eficaz, declarando que sin perjuicio de que los actos posteriores, en concreto el que el órgano de administración de la sociedad no hubiera manifestado nada en contra de este aval, pese a conocerlo, ni se hubiera opuesto cuando se interpuso en el juicio cambiario puedan considerarse concluyentes de una ratificación tácita⁶⁶.

Desde el punto de vista formal, la ratificación se somete a los mismos requisitos de forma del poder, puesto que viene a suplir a posteriori la previa inexistencia de poder y producirse dentro del término señalado en el negocio que se trata de consolidar o, en otro caso, será tiempo hábil el que transcurra hasta tanto no sea revocado el negocio por la otra parte contratante y, en general, el tiempo debe ceñirse al que racionalmente resulte suficiente en cada supuesto y no procederá una vez trabada la litis entre el acreedor y el pretendido representante. En el ámbito, cambiario parece acertado que la ratificación se podrá efectuar hasta el momento de entablar las acciones cambiarias pues de lo contrario se podría perjudicar al tomador, salvo que este voluntariamente acepte la ratificación intempestiva por considerarla más favorable para sus intereses⁶⁷.

La ratificación perfecciona el negocio jurídico celebrado por el gestor y el tercero. Esta perfección tiene eficacia retroactiva, aunque se carezca de base legal

⁶³ Así, para el derecho común, DÍEZ PICAZO, L., *La representación...*, op. cit. pág. 226.

⁶⁴ Así, en el ámbito de la representación cambiaria, PAZ-ARES, C., *Las excepciones...*, op. cit. pág. 291 declara que la relación de poder que faltaba en el momento de la suscripción se constituya posteriormente por medio de la ratificación art. 1259 Cc; VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...*, op. cit., págs. 103.

⁶⁵ Vid. VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...*, op. cit., págs. 104 admite expresamente la ratificación tácita bajo el régimen de la LCCH.

⁶⁶ Los hechos de la STS de 7 de octubre de 2014 corresponden a una sociedad cuyo órgano de administración adopta la forma de consejo de administración, y la atribución del poder de representación se rige por la regla prevista en la letra d) del art. 233 LSC prevé que pueda haber una delegación de facultades por parte del consejo a uno o varios miembros: "cuando el consejo, mediante el acuerdo de delegación, nombre una comisión ejecutiva o uno o varios consejeros delegados, se indicará el régimen de su actuación". Pero el presidente no había recibido el poder de representación mediante una delegación de facultades por parte del consejo.

⁶⁷ En este sentido, VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...*, op. cit., págs. 105 considera que una vez entabladas las acciones la ratificación perjudicará más que beneficiará al tomador.

concreta, es decir que el negocio se tiene por válido y eficaz desde que se celebró. Acaso se puede encontrar apoyo esta conclusión en el supuesto del art. 1120 C.C., que guarda analogía con el problema que contemplamos. Esta regla general puede quedar modificada como consecuencia de la voluntad expresa de las partes o del proceso de interpretación del negocio⁶⁸. El principal puede, a posteriori, aceptar la actuación del gestor o asumir sus consecuencias. La actuación del gestor se transforma entonces en actuación plenamente representativa y despliega, en el orden de la representación, todos los efectos que son propios de ésta la obligación del pseudo representante tiene como finalidad proteger o tutelar al portador del título, por lo que mal puede de ella derivarse la imposibilidad de una ratificación que, en la generalidad de los casos, favorecerá al acreedor cambiario⁶⁹.

El efecto propio de la ratificación consiste en hacer que las cosas discurran entre mandante y mandatario, así como entre el mandante, representado y terceros, como si la actuación realizada por el mandatario hubiese sido realizada dentro de los estrictos límites conferidos por el mandato y, en su caso, actuando en representación del mandante. En tal sentido, la ratificación salva las carencias de la actuación anómala del representante, tanto la ausencia de poder de representación (art. 1259 Cc), como el exceso o extra-limitación en el mandato (art. 1727 Cc), así como la inexistencia del mismo e incluso la falta de utilidad en la gestión de negocio ajenos sin mandato (arts. 1892 y 1893 Cc)⁷⁰.

En igual sentido, la jurisprudencia afirma que el principal efecto de la ratificación es la consideración del negocio como válido y eficaz con lo que el negocio concluido en nombre del representado sin poder de representación, o con extralimitación de poder, puede ser ratificado por la persona a cuyo nombre se otorgó, de tal manera que dicha ratificación confiere plena eficacia a un negocio que se celebró con falta de un elemento esencial, pero que puede aparecer «a posteriori», cual es el consentimiento del principal o representado⁷¹. Igualmente, creemos que es posible ratificar por el representado lo realizado por el representante en caso de ausencia de la *contemplatio domini* ya que si es posible ratificar lo actuado sin poder o incluso con poder pero insuficiente, parece evidente que lo realizado por el firmante que ostenta representación pero no lo hace constar en el título valor también deber ser susceptible de ratificación. La retroacción será al momento de la suscripción de la obligación cambiaria efectuada por el representante que es acto que subsana la ratificación posterior⁷².

Pero, la ratificación no perjudica los derechos adquiridos por terceros durante el

⁶⁸ Reiteradas veces ha venido diciendo la jurisprudencia que la ratificación opera retroactivamente: SSTs 22 de diciembre de 1977, 10 de mayo de 1979, 23 de octubre de 1980, entre otras.

⁶⁹ No olvidemos que el preámbulo de la LCCH IV y V señalan que sus fines son fortalecer la posición jurídica del acreedor cambiario y mayor rigor con el deudor.

⁷⁰ Cfr. GORDILLO CAÑAS, *Comentario del CC*, T. II, art. 1727, Ministerio de Justicia, Madrid, 1991, pág. 1569.

⁷¹ Vid. entre otras, las SSTs de 14 de diciembre de 1940, 7 de julio de 1944, 10 de octubre de 1963 y 27 de diciembre de 1966.

⁷² Así, bajo el régimen del art. 9 LCCH, SANCHEZ CALERO, F.; “Las excepciones cambiarias”, *RDBB*, 1988, pág. 49; VELASCO SAN PEDRO, L. A., *La representación...*, op. cit., págs. 104.

tiempo que media entre la celebración del negocio y la ratificación⁷³, en consecuencia tiene una retroacción absoluta, salvo lo que resulte de aplicar las reglas generales de protección de terceros, por cuya razón encontraremos supuestos en que la retracción no podrá ser eficaz frente a tales terceros. Sus efectos no se producen desde que se realiza la ratificación sino desde que fue puesta la firma en el título valor por el representante sin poder o con poder insuficiente, esto es con carácter retroactivo⁷⁴, ahora bien la eficacia retroactiva no puede perjudicar los derechos adquiridos por terceros durante el tiempo que media entre la celebración del negocio y la ratificación.

⁷³ Lo han señalado expresamente las SSTS de 2 de julio de 1954, 25 de junio de 1946, 3 de marzo de 1953 y 23 de octubre de 1980.

⁷⁴ Vid. las SSTS de 2 de julio de 1954, 25 de junio de 1946, 3 de marzo de 1953, 23 de octubre de 1980, entre otras.

La STS de 7 de octubre de 2014 reconoce expresamente la eficacia retroactiva de la ratificación en materia de representación cambiaria.